



Detalles sobre la publicación, incluyendo instrucciones para autores e información para los usuarios en: <http://espacialidades.cua.uam.mx>

Patrick Illmer (Universidad Nacional Autónoma de México, México)

Experiencias de organización comunitaria en Guatemala: produciendo conocimientos, prácticas y territorios pp. 48-65

Fecha de publicación en línea: diciembre 2021
DOI: [10.24275/uam/cua/dcsh/esp/v11n2/illmer](https://doi.org/10.24275/uam/cua/dcsh/esp/v11n2/illmer)

© Patrick Illmer (2021). Publicado en *Espacialidades*. Todos los derechos reservados. Permisos y comentarios, por favor escribir al correo electrónico: revista.espacialidades@correo.cua.uam.mx

ESPACIALIDADES. Volumen 11, Núm. 02, julio-diciembre de 2021, es una publicación semestral de la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Unidad Cuajimalpa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Ciencias Sociales. Con dirección en [Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex Hacienda de San Juan de Dios, Tlalpan, C.P. 14387](#) y [Av. Vasco de Quiroga No. 4871, Col. Lomas de Santa Fé, Cuajimalpa, C.P. 05300, Ciudad de México, México](#). Página electrónica de la revista: <http://espacialidades.cua.uam.mx> y dirección electrónica: revista.espacialidades@correo.cua.uam.mx. Responsable: Dra. Fernanda

Vázquez Vela. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título número 04-2018-072414222300-203, ISSN: 2007-560X, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: María Fernanda Flores Torres (Dendrita Publicidad S. A. de C. V.), [Temístocles núm. 79, int. 3, Colonia Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11550, Ciudad de México](#); Fecha de última modificación: enero del 2022. Tamaño de archivo 576 KB.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del comité editorial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.

Directorio

RECTOR GENERAL: Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
SECRETARIO GENERAL: Dra. Norma Rondero López

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

RECTOR: Mtro. Octavio Mercado González
SECRETARIO DE UNIDAD: Dr. Gerardo Francisco Kloss Fernández del Castillo

División de Ciencias Sociales y Humanidades

DIRECTOR: Dr. Gabriel Pérez Pérez
JEFE DE DEPARTAMENTO: Dr. Rafael Calderón Contreras

Revista Espacialidades

DIRECTORA: Dra. Fernanda Vázquez Vela
ASISTENTE EDITORIAL: Mtra. Evelyn Guadalupe Cazares Jiménez
ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB: Orlando Hernández Hernández
EDICIÓN TEXTUAL Y CORRECCIÓN DE ESTILO: Mtro. Hugo Espinoza Rubio
FOTOGRAFÍA DE LA PORTADA: © 2019 Jean-Philippe Delberghe @jipy32, <https://unsplash.com/photos/75xPHEQBmvA>

COMITÉ EDITORIAL: Dra. Montserrat Crespi-Valbona (Universitat de Barcelona, España), Dra. Verónica Crossa (El Colegio de México, México), Dra. Marta Domínguez Pérez (Universidad Complutense de Madrid, España), Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, México), Dra. Graciela Martínez -Zalce (Universidad Nacional Autónoma de México, México), Dr. Alejandro Mercado (Universidad Nacional Autónoma de México, México), Dr. Jorge Montejano Escamilla (Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", México), Dra. Analiese Marie Richard (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, México), Dra. Rocío Rosales Ortega (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México), Dr. Vicente Ugalde (El Colegio de México, México).

COMITÉ CIENTÍFICO: Dr. Tito Alegría (Colegio de la Frontera Norte), Dra. Miriam Alfie (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa), Dr. Mario Casanueva (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa), Dra. Claudia Cavallin (Universidad Simón Bolívar, Venezuela), Dr. Humberto Cavallin (Universidad de Puerto Rico), Dra. Flavia Freidenberg (Universidad de Salamanca, España), Dra. Clara Irazábal (Columbia University, Estados Unidos), Dr. Jorge Lanzaro (Universidad de la República, Uruguay), Dr. Jacques Levy (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Francia), Scott Mainwaring (University of Notre Dame, Estados Unidos), Miguel Marinas Herrera (Universidad Complutense, España), Edward Soja † (University of California, Estados Unidos), Michael Storper (London School of Economics, Reino Unido).

Espacialidades, tiene como propósito constituirse en un foro de discusión académica que aborda la compleja, contradictoria y multicausal relación entre el espacio y la vida social. *Espacialidades* se inscribe en el debate académico internacional sobre el giro espacial en las ciencias sociales e invita al análisis de diversas prácticas sociales y formas de organización y acción política desde una perspectiva multidisciplinaria que ponga énfasis en las diferentes escalas territoriales. Los textos publicados incorporan métodos y problemas tratados desde la sociología, la ciencia política, la economía, los estudios urbanos, la geografía, los estudios culturales, la antropología, la literatura, el psicoanálisis y el feminismo, entre otros

Experiencias de organización comunitaria en Guatemala: produciendo conocimientos, prácticas y territorios

Experiences of Community-Based Organizing in Guatemala: Producing Knowledge, Practices and Territories

PATRICK ILLMER*

Resumen

El presente artículo analiza un conjunto de expresiones de acción colectiva en defensa del territorio que han sido impulsadas por integrantes de comunidades indígenas desde hace más de una década en el norte de la región Quiché, en el Altiplano de Guatemala. Al caracterizar el proceso organizativo, resalto las nociones antagonistas a las políticas extractivistas orientadas a la mercantilización de los recursos naturales y a la reconfiguración de los territorios. A partir de una conceptualización de la idea de “diferencia”, pongo énfasis en la importancia del carácter afirmativo de los procesos organizativos comunitarios, plasmado en su propia producción de conocimientos, significados y prácticas. Desde el punto de vista empírico, analizo cómo la dimensión ontológica y su reproducción de marcos lingüísticos nutre los intentos para ampliar márgenes de resistencia e influir sobre las determinaciones sicionaturales de sus territorios. Su acción se advierte en la promoción de sus propios procesos de deliberación y consulta, así como en sus propuestas de desarrollo a través de la instalación de hidroeléctricas comunitarias. Este artículo se basa en la recopilación de información a través de entrevistas a expertos e integrantes de comunidades en la región Quiché, así como en observación participante en la zona. En esta línea, abogo por un abordaje metodológico y teórico de largo plazo, y concluyo resaltando la importancia de buscar en la producción local de conocimiento las claves para un modo de vida más sostenible y el futuro mismo de estas comunidades.

Palabras clave: Guatemala, Teoría de la Acción; Comunidades Indígenas; Defensa del Territorio; Resistencia.

Abstract

This article analyzes over a decade of expressions of indigenous communities' collective actions for the defense of their territory in the region of northern Quiché, in the highlands of Guatemala. To characterize these collective actions, I highlight the notions they use to confront and antagonize the extractivist policies that aim to commodify their natural resources and reconfigure their territories. Based on the conceptualization of the idea of “difference”, I also emphasize the importance of recognizing the affirmative character of these organizational processes, which is reflected in the production of knowledge, meanings and practices. I analyze how the ontological dimension and its reproduction in linguistic frameworks nurtures the attempts to amplify margins of resistance and influence the socio-natural determination of their territories. Their actions become visible through the promotion of their own processes of deliberation and consultation, as well as their development of proposals based on the implementation of community-based hydroelectric projects. This article is based on empirical information collected through interviews with experts and community members of the Quiché region, as well as participant observation in the area. Accordingly, I argue for a long term methodological and theoretical approach. I conclude by emphasizing the importance of local processes of knowledge production, which are key to a more sustainable reproduction and to the very future of these communities.

* Investigador posdoctoral, adscrito al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este artículo fue elaborado durante una estancia posdoctoral financiada por DGAPA-UNAM. C.e.: <patrick.illmer@politicas.unam.mx>.

Keywords: Guatemala; Action Theory; Indigenous Communities; Territory; Resistance.

Fecha de recepción: 24 de febrero del 2020

Fecha de aceptación: 12 de octubre del 2021

Introducción

Este artículo aborda procesos organizativos en defensa del territorio que se desarrollan en la zona norte del Quiché, ubicada en el Altiplano de Guatemala, donde una red de comunidades indígenas tiene como antecedente una historia de resistencia y defensa de la comunidad, en el marco del conflicto armado interno (1960-1996). Durante las últimas décadas, estas comunidades se han enfrentado a nuevas dinámicas de “subsunción por expulsión” (Dinerstein, 2015), es decir, a una integración en las relaciones globales y sociales del capital, pero basada en formas de expropiación, desplazamiento, invisibilización y expulsión. Al situar esta problemática, planteo la importancia de comprender el carácter antagónico de las articulaciones locales que resaltan las incompatibilidades con esta reconfiguración económica de la región. Además de esta caracterización oposicional o defensiva, pongo énfasis en la propia actividad afirmativa de producción de representaciones y conocimientos de las comunidades que buscan mantener un control sobre la determinación sacionatural de sus territorios.

A partir de un análisis crítico de algunas teorizaciones de la acción y los movimientos sociales predominantes en la sociología (Tilly, 1984; Zald y McCarthy, 1987; Tarrow, 1997; Giddens, 1993; 2006), introduzco la idea de “diferencia” para pensar una expresión particular de acción colectiva. En el marco de la defensa del territorio, la “diferencia” constituye una matriz de significados y prácticas que caracterizan las pautas organizativas de las comunidades, expresando un carácter no sólo antagonista, sino también afirmativo. La noción de “diferencia” sintetiza las características de estos procesos, basados en una diversidad de tácticas, producción de conocimiento y significados. A partir de dichas prácticas, los actores sociales son capaces no sólo de resistir, sino también de ampliar el margen de resistencia para garantizar y determinar la reproducción colectiva de la vida cultural y política de las comunidades.

Al plantear esta “diferencia”, me acerco a perspectivas que prestan atención a la dimensión ontológica subyacente a los procesos de acción colectiva (Chesters y Welsh, 2006; Escobar, 2008; Escobar y Osterweil, 2009; Chesters, 2012). Sin embargo, no pretendo sobre-ontologizar los movimientos y presentar los procesos organizativos entre las comunidades indígenas en el norte del Quiché como articulaciones colectivas impulsadas por imaginarios culturales puros o a partir de identidades inmutables. Al contrario, a lo largo de este artículo sostengo, en concordancia con Grosfoguel (2009: 216), que estos espacios y relaciones “no son puras ni absolutas”. La acción colectiva está insertada relacionamente en contextos más amplios, que son atravesados constantemente por las pautas económicas, sociales y culturales impulsadas por las élites, en línea con los paradigmas de la modernidad capitalista. Esto significa que las posibilidades de autodeterminación y autonomía siempre son relativas. Sin embargo, esta perspectiva permite mostrar que la comunidad, el municipio y lo local se constituyen como territorialidades concretas, desde las cuales los comunitarios impulsan formas de resistencia nutridas por sus marcos tradicionales de conocimiento, participación y producción.

El artículo empieza delineando el aporte teórico, al contrastar el marco conceptual con las perspectivas de autores de la sociología de la acción colectiva y los movimientos sociales. Luego abarca aspectos contextuales para delinear las dinámicas socioeconómicas que caracterizan el contexto posconflicto en Guatemala y, más específicamente, la zona norte del Quiché. A continuación, el análisis se centra en la mencionada red de comunidades para abarcar su producción diferencial de significados, así como una serie de prácticas y tácticas organizativas que caracterizan sus procesos de defensa de territorio. Para evidenciar detalladamente las pautas de las dinámicas de resistencia, el análisis se enfocará en procesos concretos de consultas comunitarias y la implementación de proyectos hidroeléctricos comunitarios. Los datos empíricos se basan en varios periodos de trabajo de campo, consistente en realizar observación participante y entrevistas entre 2013 y 2018. Estas

estancias se dieron principalmente a partir de un trabajo de colaboración con el Colectivo Memoria Histórica (CMH), grupo integrado por comunitarios de la región norte del Quiché, a los cuales se suman algunas personas de la Ciudad de Guatemala, con una larga trayectoria de trabajo en la zona.¹ El colectivo ha sido clave para impulsar procesos de reconstrucción de memoria histórica y sus integrantes han sido parte de numerosos procesos comunitarios en defensa del territorio en la región.

Más allá de estructura y agencia: la producción de conocimientos y prácticas en la acción colectiva

Como ya señalé en la introducción, busco presentar una perspectiva analítica que contrasta con varias vertientes teóricas sobre la acción y los movimientos sociales que han predominado en el análisis sociológico en las últimas décadas. Este contraste se basa, principalmente, en la necesidad de introducir una sensibilidad ontológica para caracterizar de forma adecuada las diferentes dimensiones organizativas entre las comunidades indígenas en el norte del Quiché, sus prácticas de resistencia y su productividad en términos de conocimiento, significados y prácticas. Con dicho fin, en este artículo conceptualizo el proceso organizativo a partir de una matriz teórica, basada en la idea de “diferencia”, para pensar su accionar colectivo como proceso antagónico, pero a la vez afirmativo y orientado a ampliar las capacidades de resistencia. Antes de profundizar en estas ideas, pretendo explicar cómo este acercamiento teórico se distingue de otras perspectivas que conceptualizan la capacidad de actuar, a partir de categorías como la agencia, la acción colectiva y los movimientos sociales. El antecedente en la bibliografía especializada para caracterizar la acción fue su contraposición a la estructura, inspirado por el famoso planteamiento de Marx, según el cual “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado” (Marx, 2003: 13). Por un lado, en la bibliografía subsecuente, enfocada en la acción y la contienda, dominaba la perspectiva marxista que llevó a destacar la influencia de los procesos económicos en la estructuración del horizonte político de los sujetos (Benjamin, 2017; Horkheimer y Adorno, 1988) y, por el otro, identificar las posibilidades de las clases subalternas o trabajadoras a superar estas restricciones estructurales (Moore, 1966; Gramsci, 1984; Lukács, 2013).

Durante la segunda mitad del siglo xx, surgieron aportes que buscaban superar el *impasse* binario entre estructura y acción, con una perspectiva relacional, entre las cuales destacan los trabajos de Giddens (1993, 2006) y Bourdieu. El primero toma como punto de partida la lingüística y a autores como Saussure y Derrida para superar el determinismo estructural rígido o funcional predominante entre varias escuelas de pensamiento. Así, Giddens ubica al agente en una multiplicidad de redes y relaciones, y le atribuye una capacidad reflexiva de aplicar su conocimiento de manera creativa, para poder alterar el ordenamiento estructural. Otro planteamiento orientado a enfatizar la interrelación de estructura y agencia, aunque inclinando la balanza hacia el peso de la estructura, fue propuesto por Bourdieu (1997). A partir de conceptos como el de *habitus*, la interiorización y reproducción subjetiva de predisposiciones objetivas y el “campo”, esfera social en la que se despliega el ordenamiento jerárquico de posiciones sociales históricamente constituidas, este autor busca trascender la categorización binaria predominante en la sociología occidental.

Si bien los planteamientos relacionales de Giddens y Bourdieu introdujeron nuevas formas de pensar la acción y sus posibilidades, también reforzó el debate en las Ciencias Sociales sobre las categorías binarias que se habían propuesto superar. En esta línea, la oposición acción-estructura seguía constituyendo el eje de debate en las principales teorizaciones de los movimientos sociales, entre éstas, la teoría de movilización de recursos (Olson, 1965; Klandermans, 1984; Zald y McCarthy, 1987) y la teoría de las oportunidades políticas (Oberschall, 1973; Tilly, 1978; 1984; Tarrow, 1997). A pesar de

* Los integrantes del CMH provienen de comunidades de seis municipios de la región: Nebaj, Chajul, Cotzal, Sacapulas, Cunén y Uspantán. El CMH suele celebrar dos encuentros por semestre, en los que, además del eje enfocado en la recuperación histórica, alrededor de cuarenta delegados comunitarios debaten información de relevancia para las coyunturas locales. Los encuentros ofrecieron oportunidades para múltiples entrevistas y conversaciones informales con los comunitarios que nutrieron las partes contextuales y empíricas de este artículo

los aportes de esta literatura al caracterizar las potencialidades de los movimientos para profundizar las concepciones de ciudadanía y reformas institucionales, también dieron lugar a una cierta miopía analítica, debida, entre otras cuestiones, a la tendencia a emular las variables de acción frente a la estructura, con las de movimientos frente a Estado, soslayando una serie de aspectos en la operatividad de la acción colectiva. El énfasis binario de acción frente a Estado tiende a subordinar la atención a las características socioculturales específicas de los movimientos, al ubicar a los actores en una modernidad con cierto grado de hibridez, disputa y heterogeneidad que, sin embargo, “sigue siendo el reflejo de un orden social eurocentrado” (Escobar, 2008: 167).

De igual manera, al priorizar la interrelación de la acción con un aspecto estructural particular, estos análisis implícitamente jerarquizan los objetivos del proceso organizativo y se centran en su dimensión antagónica, es decir, en las constelaciones de suma cero, en las que disputan por leyes o recursos con actores estatales o élites. Comúnmente, los análisis se enfocan en las acciones orientadas hacia el marco institucional y el terreno político formal para calcular el éxito o fracaso de la articulación colectiva, a partir de su capacidad de institucionalizar sus objetivos o alcanzar reformas en el sistema político. Esto deja de lado aspectos fundamentales de los procesos organizativos, entre otros, la continua producción de conocimientos o sus esfuerzos para reconfigurar significados y traducirlos en prácticas que cambien relaciones en diferentes espacios sociales, no sólo el terreno institucional.

La teorización de la acción colectiva en la literatura sobre los nuevos movimientos sociales, principalmente el trabajo de Melucci (1989; 1996) conllevó cierta apertura para superar las limitaciones mencionadas. Dicho autor conceptualiza la acción colectiva como una forma de disputa por el control y la producción no sólo de recursos económicos o cambios institucionales, sino también de los recursos simbólicos producidos por los grupos sociales dominantes. Más allá de derivar las motivaciones de la acción de un cálculo de costo-beneficio, o la disponibilidad de determinados recursos, subraya cómo la acción colectiva se deriva de una estructura de incentivos varios, dando paso a una mayor sensibilidad ontológica y atención a los procesos epistemológicos situados (Chesters, 2012).

Las aproximaciones brindadas por analistas como Melucci tuvieron resonancia entre autores enfocados en procesos de América Latina (Álvarez *et al.*, 1998; Santos, 2007; 2010), que enfatizaron la intersección entre lo político y la cultura para la comprensión de los movimientos populares e indígenas. Estos trabajos resaltan cómo los conflictos alrededor de significados, símbolos y objetos son aún más pronunciados en las sociedades del Sur Global, que operan con base en jerarquizaciones raciales y culturales que se retroalimentan con diferenciaciones políticas y económicas. La contienda que protagonizan los procesos organizativos en múltiples frentes con sus diferentes recursos tácticos constituye un desafío a los axiomas que subyacen a la hegemonía occidental moderna. Este predominio, en términos de sus clasificaciones, su racionalidad y sus conocimientos en el plano político y cultural, son cuestionados por los movimientos sociales a partir de una producción epistemológica propia.

La atención a la producción diferencial de conocimientos y la reconfiguración de relaciones sociales, más allá del terreno institucional, constituye un punto de entrada para conceptualizar la “diferencia” respecto del proceso organizativo en el que se centra este artículo. Escobar (2008: 14) ha desarrollado este aspecto con la conceptualización de “conflictos de distribución cultural”, a partir de los cuales los movimientos territoriales no sólo disputan el acceso y el control sobre recursos materiales o naturales. Más allá de esto e impulsados por una postura ontológica diferencial, cuestionan los significados y usos atribuidos a estos recursos, así como la configuración de las relaciones sociales y políticas.

A partir de la elaboración teórica de Deleuze (1994) y el planteamiento de Escobar (2008), se puede avanzar en dos aspectos analíticos: por una parte, una perspectiva que identifica la dimensión ontológica inherente a las luchas en contra de la reconfiguración y ocupación de los territorios, según intereses capitalistas. A la ontología dominante subyace la codificación predominante del valor de cambio y las perspectivas binarias que separan lo humano de lo natural, además de que amparan el dominio de lo primero sobre lo segundo. En cambio, los procesos organizativos en defensa del territorio buscan promover otras perspectivas de interrelación y codependencia para contestar estas clasificaciones hegemónicas. Sus articulaciones se desarrollan en el Sur y Norte Global tomando “formas pluriversales” (Escobar, 2016) y promoviendo compromisos alternativos de convivencia en sus territorios.

Por otra parte, con esta concepción de “diferencia” busco prevenir de una caracterización esencialista, especialmente de las culturas indígenas, rechazando presuposiciones teóricas sobre la identidad, como sustancias fijas y ontológicamente previas a la clasificación de realidades sociales. El entendimiento deleuziano de la diferencia (Deleuze, 1994) es un precursor del rompimiento, con un análisis basado en la diferenciación entre categorías ideales, a la vez que promueve una relacionalidad a partir de un devenir constante de subjetividades individuales y colectivas, cuya trayectoria está sujeta a múltiples determinaciones. Traducido al análisis de la acción colectiva, rompe con una identificación o delimitación clara de las articulaciones, y los inserta relacionalmente en un contexto más amplio. Es decir, se centra en actores que son expuestos a múltiples flujos e influencias culturales que se apropian, interpretan y rechazan. Pero, además, sostienen una productividad propia y diferencial en términos de conocimientos y prácticas. Metodológicamente, esto exige del investigador un acercamiento analítico de más profundo y largo aliento a los procesos organizativos para captar sus evoluciones, en el curso de las cuales recursos simbólicos de diversa índole influyen en sus prefiguraciones y actuaciones.

En cuanto al proceso organizacional (tema esencial en este artículo), la idea de “diferencia” debe pensarse desde una localización y una territorialidad específica. Visto a partir de su praxis, representan pautas de “reterritorialización” (Chesters y Welsh, 2006; De Landa, 2006), intentos de situar y determinar formas de interrelación que contrastan con las dinámicas de desterritorialización promovidas por las estrategias de acumulación y el impulso de subordinar todos los aspectos del mundo material y social a una lógica mercantilizada. Como desafío, la acción colectiva reterritorializante busca abrir zanjas y levantar obstáculos simbólicos y materiales para impedir el avance de las ontologías dominantes y sus formas de configurar relaciones y espacios.

El reordenamiento territorial “desde arriba”

En la región del Quiché, territorio donde se desarrolla el proceso organizativo sobre el que versa este artículo, la confrontación entre las presiones desterritorializantes promovidas por el Estado y las élites, así como los movimientos de reterritorialización impulsados por las comunidades locales, ha sido recurrente y de larga duración. Más recientemente, durante la segunda mitad del siglo xx, los intentos de reconfiguración del orden social y territorial se expresaron en las operaciones militares genocidas perpetradas en las zonas rurales indígenas. Además de reforzar la élite comercial y agraria local, a la sombra de las políticas contrainsurgentes, se insertaron nuevos proyectos y actores económicos, aprovechando posibilidades para avanzar intereses particulares, a partir de una vinculación con el Estado militar. La introducción de nuevos actores abrió el camino para cierta diversificación económica y para complementar la arraigada dinámica finquera, con nuevas vertientes rentistas, entre éstas la extracción y mercantilización de los recursos naturales.

Tales cambios, evidentes en múltiples contextos locales de Guatemala, iban de la mano con el aumento general de inversiones en recursos naturales en América Latina desde los años setenta. El Consenso de Washington de los noventa proveyó un nuevo ímpetu para estos intereses económicos, traduciéndose en una serie de reformas estructurales y acuerdos de libre comercio para los diferentes países. Como varios autores señalaron (Gudynas, 2009; Svampa, 2013), esto dio lugar a otro “consenso” basado en la mercantilización de los recursos naturales. En consecuencia, los gobiernos en toda la región de América Latina, independientemente de su orientación ideológica, fueron reforzando este papel como proveedores de materias primas, entre otros, los hidrocarburos, metales, minerales y alimentos dentro de la economía global.

En la región del Quiché, los procesos locales de resistencia desempeñaron durante mucho tiempo un papel clave para frenar una reconfiguración económica, social y cultural de la zona. Los modelos de organización de cooperativas comunitarias, surgidos en los cincuenta, se ampliaron durante las siguientes décadas, buscando sus propias formas de desarrollo económico y político, evadiendo a la vez el control de los actores estatales y económicos (Le Bot, 1995). Las respuestas coercitivas del Estado a estos intentos de ampliar la autonomía comunitaria en la segunda parte de los setenta se concretaron primero en ejecuciones selectivas, luego en operaciones de tierra arrasada e incentivaron una confluencia de las comunidades locales con los grupos insurgentes en la región. A pesar de esta cercanía, y en parte debido a las limitaciones militares y logísticas de los grupos guerrilleros para integrar a la población local, las expresiones de organización comunitaria

mantuvieron amplios grados de autodeterminación (Cabanas, 1999; IRRMH, 2013). Las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), organizaciones comunitarias que surgieron a partir del desplazamiento de miles de pobladores locales a las montañas para evadir la violencia militar, expresan estas líneas de fuga en forma de resistencia a la concentración bajo el control militar.

Por otro lado, en paralelo a las campañas contrainsurgentes, las élites militares y sus aliados buscaban impulsar sus propias proyecciones económicas e identificar posibles fuentes de riqueza y rentas. Como señala Solano (2007), el cuerpo de ingenieros del ejército desempeñaba una función clave en explorar sitios para la extracción de recursos naturales y la construcción de proyectos hidroeléctricos. Un plan maestro que reflejaba este ímpetu y delineaba una docena de grandes proyectos hidroeléctricos en diferentes partes del país fue publicado durante el gobierno del general Laugerud García (1974-1978) (INDE, 1976). Sin embargo, estas intenciones también tuvieron contratiempos. A las dificultades de establecer el control sobre la población y el territorio, se sumaron los problemas del régimen militar para atraer las inversiones necesarias. El proceso de la construcción del gran proyecto hidroeléctrico Chixoy no aportó para disolver estos obstáculos. Al reclamo internacional por las masivas violaciones de derechos humanos contra las comunidades locales en el curso de esta obra, se sumaron las alegaciones de corrupción masiva contra oficiales del ejército, en el curso de la construcción del proyecto Chixoy (Bracking, 2007:244). En conjunto, los diferentes elementos pusieron un freno a las aspiraciones militares de avanzar con otras obras hidroeléctricas y alejaron a las fuentes de capital.

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, los impedimentos para impulsar proyectos orientados a la extracción de recursos naturales y su mercantilización se empezaron a disipar. La selectiva implementación de los acuerdos inclinó el balance hacia la acumulación de capital para élites nacionales y transnacionales (Granovsky-Larsen, 2014). Las élites económicas tradicionales y emergentes promovieron el desarrollo del sector de recursos naturales como parte de una serie de modos de acumulación, entre los que figuraba la privatización de los servicios públicos del Estado, la liberalización del comercio externo y las campañas para atraer inversiones extranjeras en diferentes sectores industriales. Entre los gobiernos de posguerra, la presidencia de Álvaro Arzú (1996-2000) resultó clave para ajustar la legislación y aplicar la presión más concertada hacia la extracción de recursos naturales (Solano, 2005). Las administraciones posteriores siguieron, o incluso reforzaron, este pulso a partir de un control corrupto y clientelar sobre los mecanismos y procesos institucionales.

Nuevas concesiones para la exploración de metales aumentaron de tres en la administración de Arzú a 26 bajo la presidencia de Alfonso Portillo (2000-2004), antes de registrar otro incremento a 64 durante el gobierno de Óscar Berger (2005-2008) (Dougherty, 2011). De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Energía y Minas, en 2018 se habían concedido un total de 36 licencias mineras para la extracción de minerales o metales a empresas nacionales o transnacionales (Ministerio de Energía y Minas, 2018). En paralelo, se incrementaron las concesiones para la construcción de hidroeléctricas. Sólo a nivel de la región Quiché, actualmente se encuentran 18 proyectos en diferentes fases de planificación, construcción y operación, convirtiendo a los ríos y sus zonas colindantes en espacios de confrontación entre comunidades y la alianza de actores estatales y privados que impulsan estos proyectos.

En muchas regiones del país, la implementación de estos proyectos profundiza la crisis alrededor del agua, la falta de acceso a la tierra y las posibilidades de supervivencia. Asimismo, conlleva dinámicas de expulsión de la población local rural, cuya permanencia en sus territorios termina siendo incompatible con las estrategias de acumulación. Por un lado, contribuye al constante flujo de migración desde las zonas rurales a Estados Unidos. Por el otro, también ha propiciado nuevas tácticas organizativas entre las comunidades rurales que se han consolidado en la escena pública desde el 2004. Sus articulaciones trascendieron las demandas más convencionales alrededor de la tierra y empezaron a articularse como procesos de defensa del territorio para enfatizar su vinculación sociopolítica y cultural con espacios locales particulares. Después de las primeras manifestaciones contra una mina en la región de San Marcos, en 2004, múltiples nodos de acción colectiva surgieron para contestar la reconfiguración socioeconómica de sus contextos locales promovidos por los actores políticos y económicos dominantes. Entre éstas están las expresiones organizativas en el norte del Quiché.

Rearticulando resistencias y significados desde la memoria

Para especificar las dinámicas organizativas de las comunidades en el norte del Quiché, como uno de los múltiples procesos de defensa del territorio del periodo posconflicto en Guatemala, es imprescindible retomar algunas consideraciones adicionales sobre el contexto más específico de la región. Como ya se señaló, la región del Quiché fue una de las más fuertemente afectadas por las operaciones contrainsurgentes en el curso de los años ochenta. De las 626 masacres orquestadas durante el conflicto armado, 344 se cometieron en la región Quiché. A esto se suma el desplazamiento de más de cien mil personas, ejecuciones extrajudiciales y el reclutamiento forzoso de decenas de miles de personas en Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)² (СЕН, 1999). En el presente, el legado de las dinámicas coercitivas se reproduce en las profundas pautas de desconfianza y la fragmentación local, en la mayoría de las comunidades donde víctimas y victimarios conviven. En la región sigue dominando la vida rural y el 68.8 por ciento de la población vive en comunidades, muchas de éstas retiradas de los centros municipales (INE, 2013).

Además del mencionado impulso a proyectos de gran escala, enfocados en la mercantilización y extracción de recursos naturales, una serie de dimensiones micropolíticas orientadas a reconfigurar el comportamiento y el tejido comunitario han marcado el contexto posconflicto. Amparados en discursos de desarrollo, una oleada de ONG y cooperativas se insertaron en la región, con la misión de aliviar los persistentes problemas de pobreza y marginalización. En gran medida, su lógica operacional se basó en las premisas de “más mercado” que se concretizan en la promoción de la productividad de los comunitarios y el fomento de una mentalidad empresarial (Toruño, 2010: 150). Estos ejes orientados a infundir nuevas pautas de comportamientos sostienen la inyección de capital a través de préstamos fácilmente accesibles. Sin embargo, mientras los problemas de desigualdad y pobreza en la región han persistido, la expansión de estas micropolíticas en conjunto con el encarecimiento del coyotaje a Estados Unidos amplió el endeudamiento entre múltiples segmentos de la población (Heidbrink, 2019; Johnson y Woodhouse, 2020). Asimismo, contribuyeron a erosionar los grados de autonomía en términos de producción y consumo, mientras profundizaron las divisiones intercomunitarias debido al carácter selectivo de las intervenciones externas.

La profundización capitalista del contexto de posguerra también reconfiguró las estructuras de poder local. Varios actores contrainsurgentes locales se aglomeraron alrededor de fuentes de rentas, conformando extensas redes que vinculan representantes de empresas, autoridades municipales, finqueros locales, contratistas, exfuncionarios militares y excomandantes de las PAC (Corvo, 2014). Especialmente, los partidos políticos han representado una plataforma para que muchos de estos actores se consoliden alrededor de las estructuras municipales, lo cual les permite participar en redes que los enlazan con los funcionarios ubicados en los centros políticos a nivel nacional, con la finalidad de influir en la distribución de rentas, contratos y plazas como funcionarios (ICEFI, 2014). En lo local, estas redes se extienden hasta las comunidades rurales, donde en muchos casos consolidan representaciones comunitarias que encuentran su legitimación no en la comunidad, sino a partir de su vinculación con las mencionadas redes que le proveen cuotas de poder simbólico y recursos. Los intentos de abrir la región a las pautas de un capitalismo rentista y corrupto también se han enfrentado a múltiples expresiones de resistencia. Muchas de éstas promovidas por actores con antecedentes en organización comunitaria o diversas formas de activismo. En algunos casos, se formaron grupos para establecer sus vínculos con ONG de la capital nacional, para implementar proyectos de desarrollo “desde abajo”, formación política o empoderamiento local. Otros colectivos, en muchos casos derivados de los comités de derechos humanos vinculados a la Iglesia católica de los años noventa, emprendieron caminos para plantear demandas y sumar apoyo para sus exigencias de justicia por las graves violaciones de derechos humanos en la región (Reyes y Del Valle, 2013).

² Las PAC fueron grupos paramilitares creados a partir del 1981 en varias regiones del país con el objetivo de involucrar a la población civil y contrarrestar la influencia de las fuerzas guerrilleras. En el curso de su existencia estas patrullas cometieron miles de abusos, asesinatos y masacres (Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, 1998).

Esto refleja cómo la disputa por la memoria sigue vigente en múltiples espacios de organización social en la región del norte del Quiché. Entre las articulaciones en el campo de la memoria también surgieron esfuerzos orientados más específicamente a la recuperación de los procesos de resistencia durante el conflicto armado, rechazando, a la vez, las iniciativas de resarcimiento material promovidas desde las instancias gubernamentales y la cooperación internacional.³ Estas redes de recuperación de la memoria histórica y los espacios de intercambio de información han permitido sostener y reactivar lazos entre familias y colectivos de activistas comunitarios, muchos de ellos provenientes de la experiencia de las CPR. La idea de retejer redes comunitarias debilitadas por los periodos de violencia extrema, mantener márgenes de autonomía y fortalecer capacidades de resistencia ante los retos del contexto posconflicto llegó a cobrar centralidad (Iniciativa para la Reconstrucción y Recuperación de la Memoria Histórica, IRRMH, 2013).

A partir del 2000, el cruce entre el tema de la memoria y el creciente impulso económico hacia la mercantilización de los recursos naturales en la región empezaron a dominar los debates en diversos espacios comunitarios. De este modo, se consolidaron, inicialmente de forma latente, redes e intercambios entre comunitarios ubicados en los municipios de Nebaj, Chajul, Cotzal, Cunén y Sacapulas, pertenecientes a las etnias ixil, k'iché y sacapulteca. La experiencia y trayectoria histórica de resistencia representaba un incentivo central para reconocer la importancia de fortalecer las ideas de “comunidad” y la defensa de los bienes comunes. A esto se sumaba la obvia incompatibilidad entre las nuevas proyecciones económicas en la región y los entendimientos propios de las comunidades.

El fracaso de las iniciativas genocidas para suprimir el uso de las lenguas indígenas y los marcos culturales de significación que se reproducen consciente e inconscientemente a través de ellas representa una fuente clave para los actuales procesos de resistencia entre las comunidades del norte del Quiché. A pesar de que la producción de significados se encuentra en constante evolución, la matriz relacional y colectiva propia de los idiomas autóctonos sigue reproduciéndose entre los pueblos.

Esto conlleva formas particulares de entender el mundo, como lo refleja el término “pueblo”. En los idiomas mayas de la región del norte del Quiché no existe un término equivalente al término de comunidad. No obstante, existe una serie de términos para referirse a una colectividad, al pueblo: *tenam* en ixil, *tinamit* en quiché y *tujal* en sacapulteco. Paralelamente, los significados atribuidos a estos términos contrastan con entendimientos occidentales, pues conllevan una concepción holística de un pueblo (que incluye tierra, seres humanos y los demás elementos que comparten un espacio determinado). Noción similar caracterizan los términos utilizados para referirse a dimensiones territoriales más restringidas. Incluso cuando en el uso cotidiano se emplea el término castellano de *comunidad*, éste se asocia con el *c'omon*, una noción más específica o geográficamente reducida de un pueblo, pero con el mismo entendimiento integral. Este marco conceptual de múltiples escalas espaciales tiene como dimensión más reducida el *jun K'abal*, que se puede traducir como familia u hogar. Los distintos niveles espaciales se insertan en una matriz de tiempo y espacio, que en un modelo ideal se caracterizan por la constante búsqueda de un equilibrio basado en la complementariedad de las diferentes escalas.⁴

Con esto no pretendo idealizar a las comunidades, ya que esta significación vernácula anclada en los idiomas mayas no se traduce automáticamente al nivel de las prácticas. Es importante considerar que diversos procesos de larga duración, orientados a la eliminación de conocimientos y significados propios, han impactado fuertemente sobre las comunidades. Las políticas genocidas de los años setenta y ochenta representan el capítulo más reciente de estos procesos. Sin embargo, la supervivencia y la persistencia de los idiomas mayas también refleja una resiliencia y un control sobre sus propias formas de hacer sentido del mundo, así como una confianza en sus propios marcos culturales para la producción de conocimientos.

Por ello, en el contexto de muchas comunidades en el norte de Quiché, implicadas en la defensa del territorio, esta resistencia representa no sólo una lucha por un determinado territorio. De manera paralela a los procesos de resistencia, se

³ Los reclamos de las comunidades se centraron en que las instancias de gobierno estaban tratando de negociar únicamente una reparación material y dejar de lado la búsqueda de justicia, un eje indispensable en el planteamiento de una reparación digna e integral de las comunidades (IRRMH, 2013: 18).

⁴ Los elementos conceptuales desarrollados en este apartado derivan de una serie de entrevistas y discusiones con integrantes del CMH durante distintas etapas de trabajo de campo entre noviembre de 2013 y septiembre de 2018. Su iniciativa ha sido clave en impulsar procesos de reconstrucción de la memoria histórica y sus integrantes han sido parte de numerosos procesos comunitarios en defensa del territorio (éase la nota 1).

encuentra también “la defensa de una comprensión holística y relacional de la realidad” (entrevista colectiva a integrantes del CMH, Ciudad de Guatemala, 15 de septiembre de 2016) que persiste en la dimensión ontológica de las comunidades. Al mismo tiempo, la contienda alrededor de los significados se desarrolla por una doble vía: por un lado, hacia el exterior de las comunidades y, por el otro, hacia el interior de éstas, para recuperar una praxis comunitaria y relacional que contrasta con los significados y prácticas promovidas desde las lógicas hegemónicas de la modernidad capitalista.

En el plano de las redes de defensa del territorio, las comunidades del norte del Quiché son vistas como nodos sociales agregativos, compuestos por individuos que convergen a partir de relaciones familiares, vecinales y de amistad. En unos casos, los significados y prácticas diferenciales llegan a abarcar a todos los integrantes de la comunidad; en otros, son sectores de la comunidad los que se ensamblan para formar nodos en la red de defensa del territorio. Además, los diferentes fragmentos de la red pasan por diferentes coyunturas y momentos de resistencia. En determinados momentos, las fracciones de la red se sumergen en fases de latencia para resurgir con nueva vitalidad en momentos coyunturales; es decir, los ritmos de la cotidianidad sostienen las interacciones de esta red y su articulación pública para mantener o ampliar márgenes de resistencia sólo se manifiesta en momentos claves. Esto indica una autonomía de los diferentes nodos de la red que se activan en distintos momentos, mientras sostienen una estructura horizontal entre los colectivos. Como se mostrará en el siguiente apartado, la noción de horizontalidad es otra característica clave que se inscribió en los procedimientos de los procesos de consulta comunitaria, organizados como tácticas de resistencia a los proyectos de extracción de recursos naturales.

Horizontalidad, información y participación: la consulta a las comunidades

Los procesos de consultas comunitarias realizados en el norte del Quiché son resultado de las dinámicas de intercambio y mutuo aprendizaje que engendraron los diferentes procesos de resistencia en la Guatemala de posguerra. A partir de experiencias en otras regiones, las comunidades del Quiché se fueron apropiando de tácticas, con el objetivo de fortalecer su propia defensa de territorio, entre éstas la organización de consultas comunitarias. Por una parte, estos procesos buscan ampararse legalmente en la legislación de derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, que en Guatemala se plasmaron en la aprobación del Convenio 169 de la OIT. Este marco legal prescribe el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en casos de proyectos o políticas que afectan a sus territorios. Por la otra, los procesos de consulta tienen un arraigo histórico en las prácticas organizativas de las comunidades indígenas, lo cual impulsó la reactivación de estos procesos de deliberación y toma de decisiones en los contextos locales. Asimismo, entre los más de noventa procesos de consulta desarrollados a nivel nacional existe una gran diferencia en método, temporalidad y forma, además de que algunos se desarrollan con más participación y legitimidad local que otros. Por eso planteo analizar con más detalle las características específicas de dos procesos de consulta comunitaria organizados en dos municipios del norte del Quiché: Cunén y Sacapulas.

El planteamiento de organizar una consulta en estos municipios fue parte de una gama de tácticas empleadas para responder a las amenazas que representaban los proyectos mineros e hidroeléctricos en estos territorios. Como ya se señaló, la oposición a éstos se constituyó no sólo en términos de una disputa por un territorio. Los proyectos también fueron vistos como una amenaza por su impacto en reconfigurar relaciones sociales y su incompatibilidad con las formas de vida y significación de las comunidades.

En el municipio de Cunén, la propuesta de celebrar una Consulta Comunitaria de Buena Fe surgió en 2009, durante una serie de asambleas comunitarias. Las asambleas representaban un seguimiento a movilizaciones previas, en las que las comunidades habían buscado respuestas a una serie de problemas locales, entre otros, la presencia del ejército en el territorio, las altas tarifas de electricidad, la amenaza de una privatización del agua y una licencia de explotación minera otorgada en el municipio, sin informar a la población local (IRRMH, 2013:407-409). En el municipio vecino de Sacapulas, la promoción del proceso de consulta se debió a la llegada de información sobre exploraciones mineras en el área y la circulación de propuestas para la reactivación de planes en los alrededores del municipio para construir un proyecto diseñado durante los regímenes militares, la hidroeléctrica Serchil (IRRMH, 2013: 415).

Como próximo paso, en ambos casos, la propuesta de celebrar una consulta fue validada en asambleas municipales, en las que se designó a un grupo de líderes comunitarios nombrados con el mandato de promover la defensa del territorio y preparar la respectiva consulta municipal. A partir de este momento, se consolidaron dos elementos que reflejan la mencionada noción horizontal del proceso organizativo: por un lado, en un intento de contrarrestar las prácticas consolidadas en la política formal, que suele implicar el nombramiento desde las estructuras de poder local o la cooptación de las mediaciones comunitarias, los delegados comunitarios estaban en cada momento sometidos a la auditoría y a las decisiones colectivas de las comunidades (Illmer, 2018a). En este sentido, la concepción de representación comunitaria se basaba en el entendimiento de prestar un servicio a la comunidad, en vez de las formas más convencionales de una autoridad supraordenada que concentra el poder de decisión.

En otro orden, el énfasis horizontal se refleja en el flujo de la información y la ampliación de la participación. Bajo el lema de “quien informa forma”, se identificó la información como elemento clave para consolidar el proceso de defensa del territorio entre las comunidades al ampliar el espectro de discusión y conocimiento sobre los problemas locales. Los entendimientos mencionados de carácter holístico retroalimentaron este modo de organización, mientras que una condición para la toma de decisiones fue que la información circulara por las diferentes escalas espaciales y poblacionales, es decir, desde la escala municipal a la comunidad y a las unidades familiares (Illmer, 2018a). De igual modo, los procesos de toma de decisión buscaron basarse en medidas que integraban los diferentes niveles de participación para asegurar que los procesos organizativos nacieran desde las necesidades y los planteamientos específicos de las comunidades. En el curso de estas dinámicas de información y toma de decisiones, el delegado tiene el papel de llevar la información desde la asamblea hasta la comunidad. Después del proceso de deliberación local, la decisión de la comunidad es llevada de vuelta a la asamblea general. La “dinámica circular” y un proceso de información que fue sostenido durante varios meses fue clave para fortalecer y ampliar la conciencia local para la defensa del territorio (Trentavizi y Cahuec, 2012).

El desarrollo del acto mismo de la consulta, celebrado en asambleas comunitarias a partir de la votación con mano levantada y la posterior firma del acta municipal por todos los participantes, representa sólo el último instante de un proceso de largo plazo. Es decir, se convierte en un acto público celebrativo en el cual las comunidades afirman la decisión tomada a lo largo de los diferentes momentos de la deliberación. La Consulta Comunitaria de Buena Fe de Cunén se celebró el 27 de octubre de 2009, con la participación de 18,924 personas, lo que representa un 58 por ciento de la población. Como consecuencia, 11,116 adultos y 7,808 menores rechazaron la presencia de empresas o personas nacionales o extranjeras que buscan acaparar y explotar recursos naturales en el territorio de Cunén (IRRMH, 2013: 410).

Por otra parte, en Sacapulas, la consulta se llevó a cabo el 20 de mayo de 2011, con la participación de 103 comunidades y un total de 28,209 personas que enfatizaron su rechazo a la minería y las operaciones hidroeléctricas propuestas en su territorio (IRRMH, 2013: 417).

Los distintos momentos y características de estos procesos de toma de decisiones indican cómo la producción diferencial de significados y conocimientos es traducida a nivel de las prácticas políticas. Al hacer énfasis en las prácticas participativas y en la horizontalidad inscrita en los procesos deliberativos y procedimentales, se fortaleció la cohesión política que subyace a la postura antagónica local. Además, reflejó cómo, a partir de la actualización de prácticas culturales propias, hacen avanzar afirmativamente su “diferencia”. No se trata sólo de la promoción de prácticas que son “diferentes de” las pautas que predominan en la toma de decisiones en el terreno institucional; más bien se trata del desarrollo de una “diferencia en sí misma” (Deleuze, 1994) al tejer formas de organizar relaciones sociales a nivel local que tienen como núcleo sus propios conocimientos y tradiciones. Entre las comunidades de los dos municipios se consolidó un fuerte sentimiento respecto de la irreversibilidad de la posición articulada, y una vez que la decisión fue discutida, consultada y tomada, debía ser respetada y aplicada por las respectivas autoridades. A la vez, estas posturas han sido ratificadas anualmente a partir de una serie de asambleas municipales en las que se cita y se recuerda a las respectivas autoridades municipales respecto al compromiso asumido.

Ampliando los márgenes de resistencia: las hidroeléctricas comunitarias en la Zona Reina

Los antagonismos que se manifiestan en la región del norte del Quiché, a partir de la promoción de los intereses de las élites y el Estado, tienen fuertes connotaciones espaciales. Territorios y ríos se han convertido en espacios de disputa por el significado atribuido a los mismos, por las formas de relacionamiento con los bienes naturales y las prácticas que determinan su uso. Además de constituir la fuente de supervivencia, los ríos han marcado históricamente los caminos y rutas de desplazamiento de los pueblos del altiplano, consolidándose como parte integral de su horizonte ontológico. Ante el riesgo que presupone la proyección de intereses económicos sobre estos ríos y los territorios colindantes, las comunidades han engendrado no sólo estrategias articuladas políticamente a partir de la producción diferencial de significados y prácticas. Como demuestra una serie de experiencias, en una especie de “guerra de posiciones” gramsciana, las comunidades buscan ocupar espacios estratégicos y construir sus propias hidroeléctricas comunitarias, obstaculizando de este modo el reordenamiento territorial impulsado desde las élites.

En este sentido, constituyen “procesos de reterritorialización” (Chesters y Welsh, 2006; De Landa, 2006), en los que se despliegan tácticas para tomar control de su territorio y sus procesos de codificación. Esta vía ha llegado a ser especialmente significativa ante la planificación y el avance parcial en la construcción de 18 hidroeléctricas de tamaño mediano y grande, sobre las cuencas de los tres principales ríos de la región: el Chixoy, el Cutzalá y el río Xacbal. En ninguno de estos casos se realizó una consulta, ni se han tomado en cuenta las consultas organizadas por las comunidades locales. Al contrario, la gran parte de los proyectos han sido impulsados con tácticas que reflejan las pautas de un capitalismo rentista y coercitivo, característico del contexto posconflicto en Guatemala (Illmer, 2018b: 70-74). En algunos casos, se ha logrado la implementación de estos proyectos privados a partir de la adquisición de terrenos y negociaciones con finqueros de la región. En otros, los actores empresariales han logrado dividir y debilitar la oposición de las comunidades para adquirir la tierra que colinda con los ríos. Esto ha sido posible por apoyarse en operadores locales, muchos de ellos con un pasado contrainsurgente en la región. Entre las tácticas mencionadas por los comunitarios que preparan el terreno para los proyectos hidroeléctricos, se encuentra “la falsificación de títulos de propiedad, las amenazas contra comunitarios locales, la exacerbación de conflictos intercomunitarios, la compra de líderes o la promoción de proyectos bajo el lema de la responsabilidad social empresarial, para asegurarse el derecho de propiedad o la servidumbre de paso de las comunidades” (entrevista colectiva a integrantes del CMH, Nebaj, 14 de octubre de 2017). El avance de los proyectos se acompaña de un discurso de desarrollo que promete oportunidades de empleo, servicios sociales y electricidad para la región. Sin embargo, los primeros proyectos han evidenciado lo opuesto. Las oportunidades de empleo han sido temporales, vinculadas principalmente a trabajos de construcción, mientras muchas de las comunidades que rodean los proyectos siguen sin acceso a la red eléctrica. La electricidad más bien se conecta con los anillos de alta tensión para ser exportada o trasladada a otras regiones (Solano, 2014).

En el contexto de esta penetración de sus territorios, las comunidades han ampliado su espectro de tácticas de resistencia. Además de la acción directa (como bloqueos de carretera, mesas de diálogo y la manifestación de su rechazo en las consultas comunitarias), los comunitarios reasentados en 1998 en la finca El Tesoro, ubicado en el territorio de la Zona Reina del municipio de San Miguel Uspantán, en el norte del Quiché, han empezado a contraponer una serie de hidroeléctricas comunitarias frente a la expansión de las hidroeléctricas de gran escala. Los iniciadores de estos procesos pertenecen en su mayoría a la etnia ixil y k'iché, aunque también hay presencia de algunas familias ladinas y q'anjobales (Colectivo Madreselva, 2014:28). A estas familias que formaron la comunidad 31 de Mayo en la finca asignada, las vincula la experiencia de haber sido integrantes de las CPR durante el conflicto armado y posteriormente reasentadas en el contexto de los Acuerdos de Paz. En el marco de los programas de reasentamiento de personas desplazadas, los integrantes de las CPR fueron dispersados en diferentes regiones del país, evidenciando la intención del Estado de debilitar y fragmentar esta expresión organizativa (IRRMH, 2013).

Una parte de los comunitarios fueron reasentados en la Zona Reina, donde las dificultades climáticas para cultivar granos básicos han llevado a la mayoría de las personas a dedicarse al cultivo de cardamomo. Además de ubicarse en un área inhóspita y con tierras poco aptas para la producción agrícola tradicional, su asentamiento en el área coincidió con

los intereses gubernamentales de abrir la región a las operaciones de los proyectos señalados, así como campos petroleros y mineros, carreteras y anillos de cables de alta tensión para el transporte de electricidad (Solano, 2005; 2007). En este contexto, el impulso dado a las hidroeléctricas comunitarias refleja cómo los actores organizados empujan sus propias estrategias para controlar y configurar su territorio, ampliar márgenes de autonomía y responder a las necesidades concretas de las comunidades.

La base para el desarrollo de estos proyectos ha sido la tradición y experiencia organizativa, así como la capacidad de forjar alianzas con organizaciones y colectivos para lograr apoyo financiero, logístico y técnico para la realización de las obras. El proyecto inicial surgió con motivo de discusiones entre las comunidades y un colectivo de solidaridad de España, dando lugar a los primeros trabajos en el año 2002, para abrir una zanja en el río y transportar hacia la comunidad los materiales necesarios para la construcción (entrevista con Jorge Grijalba, Ciudad de Guatemala, 26 de septiembre de 2018). De la misma manera, las diferentes fases de la construcción se basaron en el trabajo comunitario, replicando las formas organizativas que habían garantizado la supervivencia durante el conflicto armado en la montaña. Fue central la idea de que la contribución equitativa de todas las personas era imprescindible para cualquier intento de mejorar las condiciones de vida del colectivo, por lo cual se nombró una junta de delegados comunitarios, cuyo objetivo era supervisar y administrar la distribución del trabajo (Colectivo Madreselva, 2014: 68).

A pesar de esta orientación comunitaria, con el paso de los años los comunitarios se tuvieron que enfrentar a distintos obstáculos: por un lado, una de las dificultades fue asegurar la sostenibilidad financiera del proyecto hidroeléctrico, lo que constituyó un reto adicional ante la precariedad económica, que se sumaba a la búsqueda constante de condiciones mínimas para una vida digna, acceso a servicios de educación y salud. Por el otro, algunas dinámicas amenazaban constantemente su unidad, como la llegada de actores externos vinculados a las iglesias evangélicas, la presencia de intereses vinculados a las grandes empresas hidroeléctricas y a la municipalidad de Uspantán, que buscaban ganar apoyo entre las comunidades.⁵

A pesar de varios periodos de impasse, los comunitarios encontraron una base de consenso y se mantuvieron en el proceso. Resultó especialmente favorable la alianza con el colectivo ambientalista Madreselva,⁶ que obtuvo el apoyo técnico y financiero necesario para completar los proyectos. En otro orden, la amenaza directa de la construcción de varias grandes hidroeléctricas privadas en otras partes de la región del Quiché representó otro incentivo para que los comunitarios priorizaran la defensa territorial, en la que las hidroeléctricas comunitarias representan un elemento clave. La orientación del proceso organizativo también fue reafirmada por una Consulta Comunitaria de Buena Fe, realizada en la Zona Reina en octubre de 2010, en la cual 25,260 personas pertenecientes a 105 comunidades votaron para rechazar la entrada de grandes empresas hidroeléctricas y mineras en la región (Katz y Torres, 2017).

Los esfuerzos de las comunidades se vieron premiados el 30 de mayo de 2012, con el inicio de las operaciones y la inauguración del primer proyecto nombrado “Luz de los Héroes y Mártires de la Resistencia”, en honor a los familiares y amigos caídos durante el conflicto armado de las comunidades asentadas en la finca El Tesoro (Colectivo Madreselva, 2014). Este primer proyecto fue capaz de proporcionar electricidad para 476 familias de las comunidades de la Finca El Tesoro. En los siguientes años, se sumaron otros tres proyectos hidroeléctricos en las comunidades de La Taña, Los Lirios y La Gloria, lo cual permitió brindar electricidad a más de mil familias de la zona. Según un ingeniero involucrado en el diseño de los proyectos, para los próximos años “se prevé ampliar aún más la cobertura a partir de la interconexión de los diferentes proyectos” (entrevista con Jorge Grijalba, Ciudad de Guatemala, 26 de septiembre de 2018).

El impacto de los proyectos ha sido importante no sólo en términos de la defensa del territorio y la mencionada “guerra de posiciones” con los grandes proyectos hidroeléctricos e intereses privados en la región. También se refleja en la capacidad de dar soluciones a problemas prioritarios de las comunidades, entre los que se hallan el fortalecimiento de

³ Como consecuencia de estos conflictos y constantes intentos de actores externos de instigar divisiones, los comunitarios que integraron la comunidad 31 de Mayo se fueron dividiendo en cuatro sectores: Unión 31 de Mayo, San Antonio Nueva Esperanza, El Tesoro 9 de marzo y San Marcos La Nueva Libertad.

⁴ Madreselva es una organización ecologista que lleva dos décadas trabajando en temas de la defensa de territorio y la biodiversidad. Durante este tiempo, han acompañado a múltiples procesos comunitarios que defienden sus territorios y bienes naturales de proyectos extractivistas.

los centros educativos y de salud, así como la facilitación de tareas agrícolas y domésticas. La gestión de los proyectos ha quedado en manos de las comunidades que, basadas en sus experiencias de resistencia, han sabido superar múltiples retos y profundizar los procesos de autonomía comunitaria en la región. A estos beneficios en la cotidianidad de las localidades se suman las consideraciones de largo plazo, vinculadas a la sostenibilidad ambiental de las microhidroeléctricas que se ajustan al ecosistema del río para minimizar su impacto. El contraste en términos de sostenibilidad se refleja en el uso del caudal del río, pues en promedio se integra únicamente un 3 por ciento del caudal, lo cual contrasta con las formas de operación de las grandes hidroeléctricas en la región, que subsumen el 87 o el 90 por ciento del río, lo que implica impactos erosivos irreversibles en las cuencas y los ecosistemas de los ríos (Colectivo Madreselva, 2014: 89).

La apuesta por las hidroeléctricas comunitarias impulsada desde las comunidades en el norte del Quiché se cruza con múltiples iniciativas en otros municipios de la región, como la captación de agua de lluvia y neblina, las estrategias de producción de energía a través de viento y sistemas solares, así como la recuperación de semillas y producción orgánica para consumo local; es decir, a pesar de los avances del reordenamiento territorial promovidas por las élites nacionales y transnacionales, hay una constante búsqueda de ampliar márgenes de autonomía en la producción y de organizar relaciones sociales de forma más sostenible, en tanto dimensión clave de sus micropolíticas de resistencia.

Conclusiones

Contrario a las vertientes de las Ciencias Sociales que ubican el análisis de los movimientos sociales alrededor del binomio de estructura y agencia, o que se centran en su capacidad de institucionalizar sus objetivos en el terreno de la política formal, este artículo se enfoca en otro aspecto de la operatividad de la acción colectiva. Prestando atención a la dimensión ontológica introdujimos la idea de “diferencia” para poner el énfasis en la productividad en términos de conocimientos, significados y prácticas de los procesos locales de acción colectiva. Esta perspectiva representa la base para el análisis de las expresiones de defensa de territorio que se desarrollan entre las comunidades indígenas del norte del Quiché.

Mientras recuperan memorias y formas tradicionales de conocimiento, estas comunidades han retejido lazos y vínculos comunitarios para fortalecer sus capacidades de resistencia. En la reactivación de imaginarios y prácticas, ha sido clave la reivindicación de un marco ontológico para guiar sus formas de hacer sentido del mundo. A partir de una raíz lingüística que reproduce teóricamente y crea una receptividad práctica para nociones holísticas de la realidad sacionatural, los comunitarios han ido desarrollando su articulación en diferentes planos, incorporando tácticas de otros nodos de resistencia activos en el país. Por una parte, los procesos organizativos han intentado fortalecer la apropiación de la defensa del territorio, a partir de la creación de espacios participativos de deliberación y toma de decisiones. En el abordaje de estos procesos, descritos a partir de la experiencia en dos municipios de la región del Quiché, se ha puesto el énfasis en el rescate del entendimiento integral que persiste en los marcos cognitivos de los pueblos y permite impulsar la difusión de información y conocimiento en diferentes escalas organizativas. Por la otra, con la instalación de microhidroeléctricas en la Zona Reina, los comunitarios han antepuesto sus propias fórmulas para mejorar la vida frente a las concepciones hegemónicas de desarrollo. Estos proyectos, además de nutrir la dimensión simbólica de la resistencia y abordar demandas concretas, anteponen obstáculos materiales al reordenamiento impulsado desde el Estado. Además, han mostrado cómo las comunidades, al determinar la orientación y gestión de los procesos organizativos, dan soluciones a las necesidades concretas que surgen desde lo local. Como ha quedado de manifiesto, las propuestas comunitarias conllevan nociones de sostenibilidad en línea con su marco cognitivo, lo que suele estar ausente en los grandes proyectos impulsados en la zona.

Las comunidades se enfrentan a múltiples desafíos y dinámicas que ponen en peligro sus esfuerzos para ampliar sus márgenes de resistencia y su determinación de las relaciones sacionaturales en sus territorios. Por ejemplo, destaca la dificultad de impulsar las dinámicas horizontales y participativas de las consultas comunitarias en el terreno político de las comunidades, cuando la política formal, de manera constante, busca profundizar la determinación de procedimientos a través de pautas clientelares y jerárquicas. Además, el acceso más generalizado a la electricidad, brindado por las hidroeléctricas

comunitarias, también induce cambios en las pautas de interacción y de consumo que contravienen al énfasis del proceso organizativo en la dimensión colectiva.

Sin embargo, estos desafíos no invalidan el propósito original de este artículo respecto de la importancia de resaltar la producción de conocimientos y la capacidad de encontrar soluciones en el marco de expresiones locales de resistencia. Como se ha visto, éstas son clave para aumentar la receptividad de entendimientos más sostenibles y participativos, y de aquéllas depende la reproducción y el futuro de estas comunidades.

Fuentes

Álvarez, Sonia E. (1998). "Latin American Feminisms 'Go Global': Trends of the 1990s and Challenges for the New Millenium", en Sonia E. Álvarez et al., eds., *Cultures of Politics, Politics of Culture. Revisioning Latin American Social Movements*. Oxford: Westview Press, pp. 293-324.

Álvarez, Sonia E. et al. (1998). "Introduction: The Cultural and the Political in Latin American Social Movements", en Sonia E. Álvarez et al., eds., *Cultures of Politics, Politics of Culture. Revisioning Latin American Social Movements*. Oxford: Westview Press, pp. 1-29.

Benjamin, Walter (2017). "Kapitalismus als Religion", en *Gesammelte Schriften*, vol. 6. Fráncfort: Suhrkamp, pp. 100-104.

Bourdieu, Pierre (1997). *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Trad. de Thomas Kauf. Barcelona: Anagrama.

Bracking, Sarah. (2007). "Accountability in Development Finance Projects: Between the Market and a Soft Place", en Sarah Bracking, ed., *Corruption and Development. The Anti-Corruption Campaigns*. Londres: Palgrave Macmillan, pp. 236-256.

Cabanas, Andrés (1999). *Los sueños perseguidos. Memoria de las Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra*. Guatemala: Magna Terra Editores.

Chesters, Graeme e Ian Welsh (2006). *Complexity and Social Movements. Multitudes at the Edge of Chaos*. Nueva York: Routledge.

Chesters, G. (2012). "Social Movements and the Ethics of Knowledge Production", *Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest*, vol. 11, núm. 2: 145-160.

Colectivo Madreselva (2014). *El camino de la luz. Historia del proyecto comunitario de energía eléctrica "Luz de los Héroes y Mártires de la Resistencia"*, Uspantán Zona Reina, Quiché, Guatemala. Guatemala: Colectivo Madreselva.

Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) (1999). Guatemala. *Memoria del silencio*. Guatemala: Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas.

Corvo, Álvaro (2014). "Poderes viejos y vecinos nuevos: la disputa por los recursos naturales en el norte del Quiché", *Prensa Comunitaria*, en <<http://comunitariapress.wordpress.com/2014/07/14/poderes-viejos-y-nuevos-vecinos>>, consultada el 31 de agosto de 2019.

Deleuze, Gilles (1994). *Difference and Repetition*. Londres: Athlone Press.

- Dinerstein, Ana Cecilia (2015). *The Politics of Autonomy in Latin America. The Art of Organising Hope*. Londres: Palgrave Macmillan.
- Dougherty, M. L. (2011) "The Global Gold Mining Industry, Junior Firms and Civil Society Resistance in Guatemala", *Bulletin of Latin American Research*, vol. 40, núm. 4: 403-418.
- Escobar, Arturo (2008). *Territories of Difference. Place, Movements, Life, Redes*. Londres: Duke University Press.
- Escobar, A. (2016). "Sentipensar con la Tierra: las luchas territoriales y la dimensión ontológica de las epistemologías del sur", *AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana*, vol. 10, núm. 1: 11-32.
- Escobar, A. y M. Osterweil (2009). "Movimientos sociales y la política de lo virtual. Estrategias deleuzianas", *Tabula Rasa*, núm.10: 123-161.
- Giddens, Anthony (2006). *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*. Buenos Aires: Amorrortu, 2006.
- Giddens, Anthony (1993). *Las nuevas reglas del método sociológico. Crítica positiva de las sociologías interpretativas*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Granovsky-Larsen, S. (2014). "The Guatemalan Campesino Movement and the Postconflict Neoliberal State", *Latin American Perspectives*, vol. 44, núm. 5, pp. 1-21.
- Gudynas, Eduardo. (2009). "10 Tesis urgentes sobre el extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual", en Jürgen Schuldt et al., eds., *Extractivismo, política y sociedad*. Quito: Centro Andino de Acción Popular (CAAP)/Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), pp. 187-225.
- Gramsci, Antonio (1985). *Cuadernos de la cárcel*. Ed. crítica del Instituto Gramsci. México: Era.
- Grosfoguel, R. (2009). "A Decolonial Approach to Political-Economy: Transmodernity, Border Thinking and Global Coloniality", *Kult 6, Special Issue. Epistemologies of Transformation: The Latin American Decolonial Option and its Ramifications*, pp. 10-38.
- Heidbrink, L. (2019). "The Coercive Power of Debt: Migration and Deportation of Guatemalan Indigenous Youth", *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, vol. 1, núm. 24: 263-281.
- Horkheimer, Max y Theodor W. Adorno (1988). *Dialéctica del iluminismo*. Trad. de H.A. Murena. Buenos Aires: Sudamericana.
- Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) (2014). *Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas*. Guatemala: F&G Editores.
- Illmer, P. (2018a). "The Defence of Territory and Local Struggle for More Democracy in Post-war Guatemala", *Democratization*, vol. 25, núm. 5: 771-786.
- Illmer, P. (2018b). "La violencia y las élites en Guatemala: pactos en la interfaz de lo legal y lo ilegal", *Estudios Centroamericanos*, vol. 73, núm. 752: 65-86.

- Instituto Nacional de Electrificación (INDE) (1976). *Plan Maestro de Electrificación Nacional*, vol.1. Guatemala: INDE.
- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2014). “Caracterización departamental Quiché, 2013”, en <<https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/20/8lyY70TduTA2BpXw8p4mpswppmvOyKX.pdf>>, consultada el 15 de diciembre de 2019.
- Iniciativa para la Reconstrucción y Recuperación de la Memoria Histórica (IRRMH) (2013). *El camino de las palabras de los pueblos*. Guatemala: Magna Terra Editores.
- Johnson, R. L. y M. Woodhouse (2020). “Securing the Return: How Enhanced US Border Enforcement Fuels Cycles of Debt Migration”, *Antipode*, vol. 50, núm. 4: 976-996.
- Katz, Eleonor y Selvin Torres (2017). “Una mirada a las consultas comunitarias en Guatemala”, en <<https://ceppas.org.gt/infografia-consultas-comunitarias-en-guatemala/>>, consultada el 15 de enero de 2020.
- Klandermans, B. (1984). “Social-Psychological Expansions of Resource Mobilization Theory”, *American Sociological Review*, núm.49: 583-600.
- Landa, Manuel de (2006). *A New Philosophy of Society. Assemblage Theory and Social Complexity*. Londres: Continuum.
- Le Bot, Yvon (1995). *La guerra en tierras mayas. Comunidad, violencia y modernidad en Guatemala (1970-1992)*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Lukács, Georg (2013). *Historia y conciencia de clase*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
- Marx, Carlos (2003). *El 18 Brumario de Luis Bonaparte*. Madrid: Fundación Federico Engels.
- Melucci, Alberto (1996). *Challenging Codes. Collective Action in the Information Age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Melucci, Alberto (1989). *Nomads of the Present*. Londres: Hutchinson Radius.
- Ministerio de Energía y Minas (MEM) (2018). “Licencias vigentes y solicitudes en trámite”, en <<http://www.mem.gob.gt/mineria/estadisticas-mineras/licencias-vigentes-y-solicitudes-en-tramite/>>, consultada el 15 de junio de 2019.
- Moore, Barrington (1966). *Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Boston: Beacon Press.
- Oberschall, Anthony (1973). *Social Conflict and Social Movements*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Olson, Mancur (1965). *The Logic of Collective Action*. Cambridge: Harvard University Press.
- Prensa Comunitaria (2010). “En Uspantán reconocen la legitimidad de la Consulta de Buena Fe”, *Prensa Comunitaria*, en <<https://www.prensacomunitaria.org/en-uspantan-reconocen-la-legitimidad-de-la-consulta-de-buena-fe/>>, consultada el 15 de junio de 2019.
- Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (1998). *Guatemala nunca más*. Guatemala: ODHAG.

- Reyes Prado, Anantonia y Ruth del Valle (2013). “Defensa y promoción de los derechos humanos en Guatemala”, en Virgilio Álvarez Aragón *et al.*, eds., Guatemala: historia reciente (1954-1996), t. 4, *Proceso de paz y contexto internacional*. Guatemala: Flacso Guatemala, pp. 257-335.
- Santos, B. de S. (2007). “Beyond Abyssal Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges”, Eurozine, en <<http://www.eurozine.com/pdf/2007-06-29-santos-en.pdf>>, consultada el 15 de junio de 2018.
- Santos, Boaventura de Sousa (2010). *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur*. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad.
- Solano, L. (2014). “Un repaso a los planes energéticos en Guatemala: ¿quiénes son los dueños de las hidroeléctricas?”, *El Observador*, vol. 9, núm. 44-45: 39-79.
- Solano, L. (2007). “La Franja Transversal del Norte: neocolonización en marcha”, *El Observador*, vol. 2, núm. 7: 3-27.
- Solano, Luis (2005). *Guatemala: petróleo y minería en las entrañas del poder*. Guatemala: Inforpress.
- Svampa, M. (2013). “Extractivismo en América Latina. El consenso de los *commodities*”, *Le Monde Diplomatique*, núm. 168, pp. 4-6.
- Tarrow, Sidney (1997). El poder en movimiento. *Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza.
- Tilly, Charles. (1984). “Social Movements and National Politics”, en Charles Bright y Susan S. Harding, eds., *State Building and Social Movements*. Ann Arbor: Michigan University Press, pp. 15-38.
- Tilly, Charles (1978). *From Mobilization to Revolution*. Nueva York: Random House.
- Toruño, M.C. (2010). “Debt and Migration. The Ixil in the Global Circuit of Capital”, *Latin American Perspectives*, vol. 37, núm. 1: 148-152.
- Trentavizi, B. y E. Cahuec (2012). “Las consultas comunitarias de ‘buena fe’ y las prácticas ancestrales comunitarias indígenas en Guatemala. Informe de campo de la investigación: Sistematización de los Mecanismos de Participación y Consultas Tradicionales de Pueblos Indígenas Guatemala. Dos casos de estudio: San Juan Ixcoy, Huehuetenango y Santa María Cunén”, *El Quiché*, en <http://www.ripaz.org/listado_docs/pueblos_indigeneas/Las%20Consultas%20comunitarias%20indigenas.pdf>, consultada el 10 de octubre de 2017.
- Zald, Mayer N. y John David McCarthy (1987). *Social Movements in an Organizational Society. Collected Essays*. Nueva Brunswick: Transaction Books.

Entrevistas del autor

Entrevista colectiva con integrantes del CMH, Nebaj, 14 de octubre de 2017.

Entrevista colectiva con integrantes del CMH, Ciudad de Guatemala, 15 de septiembre de 2016.

Entrevista con Jorge Grijalba, Ciudad de Guatemala, 26 de septiembre de 2018.